

EL GOLPE A LA IGUALDAD: CUARENTA AÑOS DESPUÉS

Rodrigo Baño¹

EL TIEMPO Y LA MEMORIA

Si hay algo que los niños no entienden, eso es el tiempo. El ayer, el mañana y el ahora se les enredan con facilidad. Cuando crecen un poco y se les explica que el pasado no existe porque ya pasó, que el futuro no existe porque todavía no es y que el presente es solo una línea sin extensión que separa el pasado del futuro, llegan a la lógica conclusión de que el tiempo no existe y se van a jugar a otra cosa. Cuando grandes se compran un reloj y dejan de hacer preguntas.

Pero no deja de haber problemas con el tiempo y uno de los grandes problemas es la memoria; que es molesta, porque es conciencia. La memoria trae el pasado al presente, trae el pasado a la conciencia, pero la trae como construcción, como construcción con sentido. A menudo se considera el pasado como antecedente del presente, los individuos y las sociedades se entenderían por su pasado. Poco se piensa que el pasado no es un antecedente del presente, sino que forma parte de este. Ya más de alguna vez he señalado que el niño que fuimos no es solo un antecedente de lo que somos como adultos, sino que ese niño forma parte de lo que luego somos; si así no fuera los psicoanalistas se morirían de hambre. Lo mismo ocurre con el pasado de una sociedad, pues forma parte de esta y no solamente es su antecedente. Pero no es lo mismo el pasado que la memoria, sea esta individual o colectiva. No es lo mismo el pasado de un individuo y su recuerdo, ni es lo mismo el pasado de una sociedad y su historia. El recuerdo siempre es una construcción que define un sentido y de acuerdo al cual se enhebran una serie de fenómenos. El pasado es un conjunto heterogéneo de fenómenos del cual la memoria rescata algunos para construir la memoria.

Esta ya larga introducción no tiene otro objetivo que tratar de justificar un enfoque un tanto distinto del habitual para hacer referencia al Golpe militar de 1973 y sus consecuencias. No es que solo exista una perspectiva en los análisis de ese período, de hecho lo que pretendo plantear difícilmente podría reclamar alguna originalidad. Sin embargo, es indudable que la memoria de aquella época se ha construido fundamentalmente alrededor del tema de los derechos humanos. En tal sentido, recordar el Golpe militar y el régimen que este instala, suele evocar de manera inmediata las muertes, las torturas, los desaparecimientos, la cárcel, la exoneración, la censura, el exilio. La memoria, la historia, se construye desde esa perspectiva, en la que se insertan los acontecimientos

1. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Senador Universitario.

ocurridos en la época. La discusión que todavía se plantea respecto a ese período acostumbra enfocarse en esa perspectiva, la que está en la base del juicio que regularmente se hace. Sin embargo, suele olvidarse que las violaciones a los derechos humanos son una consecuencia de los objetivos más directos que tuvo el Golpe militar de 1973; fueron medios para conseguir un resultado.

Regularmente, cuando en la situación actual se hace referencia al Golpe militar de 1973 y al régimen que ahí se instaló, muchas veces se manifiesta que el trauma, la herida generada en aquel entonces, no ha cicatrizado, no se ha cerrado, haciendo alusión directa a que no se han aclarado plenamente las violaciones a los derechos humanos y no se ha hecho la justicia que corresponde a las víctimas: verdad y justicia. Por otra parte, algunos incluso manifiestan su extrañeza cuando todavía se hacen manifestaciones violentas de repudio al Golpe militar y al régimen de Pinochet, recordando que los jóvenes manifestantes no fueron víctimas de derechos humanos, porque ni siquiera habían nacido cuando eso ocurrió (naturalmente olvidan que se celebra todos los años un 18 de septiembre en que ni siquiera habían nacido los abuelos de los que celebran y que también se hacen manifestaciones por el nacimiento y muerte de un hijo de Dios que tampoco conocieron en vivo y en directo).

Se entiende siempre que el problema de Pinochet es el problema de los derechos humanos, con la misma naturalidad que se piensa que el problema del nazismo fue el Holocausto judío. El impacto del horror es tan fuerte, que la memoria histórica tiende a construirse casi exclusivamente en esa línea, lo que suele dejar ese horror sin más explicación que la irracionalidad y la maldad humana. Al reducir las causas a la locura se renuncia a buscar causas y se aceptan los hechos como una fatalidad irresistible. Sin embargo, el pasado es mucho más que esa parcial construcción histórica que hace la buena conciencia y es conveniente indagar ese pasado, si es que se quiere evitar que se repita aquello que se lamenta y comprender más el presente.

Por esta razón es que, sin olvidar el tema de los derechos humanos, porque no se puede olvidar, prefiero en esta oportunidad referirme a un tema que es crucial a la hora de comparar el pasado y el presente: la igualdad. Poco se advierte que el carácter esencial del Golpe militar y del Gobierno instalado con este fue un golpe a la igualdad y la consolidación de la desigualdad.

Naturalmente no se puede negar ni menoscabar la importancia del enfoque de derechos humanos. Más aun, una extensión de la consideración de derechos humanos podría abarcar también otros hechos no regularmente considerados, como son aquellos a los que haré referencia. Sin embargo, me parece conveniente mantenerlos diferenciados a fin de mostrar su relevancia y, especialmente, para resaltar la relación que tienen con lo que actualmente ocurre en el país. Porque esa es mi pretensión: tratar de relacionar ese pasado con el presente y cómo el pasado se entiende desde el presente y el presente desde el pasado.

LAS DIFÍCILES COMPARACIONES

El Chile actual parece muy distinto de aquel que evoca el recuerdo del Golpe militar, los antecedentes más directos de ese golpe y sus consecuencias. Desde fines del siglo recién pasado, este es un país con un régimen democrático funcionando, relativamente tranquilo y estable, que muestra cifras macroeconómicas envidiables para la región y que construye su cotidianeidad alrededor del crédito y del consumo, sin amenazas visibles para la continuidad del modelo económico y con una continuidad política asegurada por el generalizado desinterés de la población, preocupada en general por los problemas individuales y familiares.

Sin embargo, desde hace algunos años pareciera instalarse en la opinión pública la idea de que se está pasando por momentos al menos difíciles. Se habla de crisis de representación política, de derrumbe del modelo, de paradojas del malestar y se ensayan múltiples hipótesis para explicar lo que está pasando. De hecho, se presentan como datos duros el desprestigio de las instituciones y de los políticos expuestos en múltiples encuestas y ratificados con un creciente apoliticismo que se expresa en niveles de participación electoral que han caído hasta ya ni siquiera alcanzar a la mitad de los ciudadanos. Por otra parte, hay crecientes muestras de malestar en la población, manifestadas no solo en encuestas de opinión, sino en movilizaciones sociales de grandes repercusiones. Todo lo cual lleva a que muchos planteen la existencia de una situación paradójica, en que el extendido malestar se instala en una situación de auge y abundancia económica que precisamente provee las bases para el bienestar de la población.

Ante este panorama, las explicaciones se agrupan en dos grandes líneas: una es la de aquellos que piensan que el malestar observado obedece a motivos psicosociales, como la frustración que producen expectativas exageradas ante el crecimiento, la pérdida de las confianzas interpersonales, las exigencias del proceso de competencia desatada, la nostalgia de la familia tradicional, la pérdida de los lazos comunitarios, etc. La otra es la de aquellos que piensan que hay motivos materiales objetivos en ese malestar, ya que hay muchos marginados y excluidos de los supuestos beneficios del modelo económico impuesto. Poco se piensa que algo tiene que ver la historia con esto.

Una comparación de cuarenta años muestra grandes diferencias, grandes cambios, que casi podrían dar cuenta de dos países distintos, pero es el mismo y eso es fundamental para comprenderlo. La economía, la sociedad, la cultura y la política se muestran radicalmente diferentes. Pero no solo se trata de comparar dos fotografías, dos momentos estáticos, sino de comparar dos procesos. Uno que marcha hacia la igualdad y uno que consolida la desigualdad.

EL TEMA DE LA IGUALDAD

Se ha hecho habitual escuchar que Chile ha obtenido un alto grado de desarrollo económico y que ha mejorado sustancialmente el acceso al consumo de sus habitantes, pero también se señala como uno de los rasgos más repetidos en la caracterización de la so-

ciudad chilena actual es su rechazo a la política y la desconfianza hacia las instituciones. Lo primero se expresa en las consabidas cifras macroeconómicas y lo segundo, no solo en los repetidos estudios de opinión pública a través de encuestas, sino que se manifiesta en hechos tan concretos como es la creciente y ya catastrófica cifra de abstenciones en las competencias electorales. Además, es posible observar crecientes expresiones de malestar a través de la proliferación y masificación de protestas sociales, cuya máxima expresión se ha dado en el ámbito estudiantil, pero que abarca otras muchas y variadas manifestaciones regionales, étnicas, laborales, etc. En consecuencia, hay un abandono de la política institucional y una proliferación de la política en el movimiento social. Lo cual estaría señalando algo obvio: que la política institucionalizada no ha asumido la representación del conflicto social realmente existente y se mantiene ajena y alejada de este. Es lo que genera la imagen de una “clase política” que está autorreferida y que conlleva el desinterés de la ciudadanía, la que recurre a otras formas de manifestación de sus problemas.

Mucho se habla actualmente de la reivindicación de la diferencia y de la demanda por respeto a la diferencia, lo cual se expresa a través del eslogan de defensa del pluralismo y la diversidad, a la vez que en rechazos a toda forma de discriminación contra lo diferente. Sin embargo, detrás de estas reivindicaciones asoma el tema propiamente político que desarrollan muchos autores, que es la demanda por igualdad. Aunque parezca contradictorio, si uno quisiera referirse a qué tipo de problemas se trata, habría que decir que estos problemas son básicamente los derivados de una situación de desigualdad. Lo que se reclama no es simplemente el reconocimiento de una diferencia, sino que se reclama que esta diferencia sea considerada con igualdad. Que tenga el mismo trato un indígena que un blanco, que tenga el mismo trato un homosexual que un heterosexual, que tenga el mismo trato una mujer que un hombre, que tenga el mismo trato una región que la capital.

El tema central de la política ha sido y sigue siendo la igualdad. Cuando Aristóteles analiza la inestabilidad de las distintas formas de Gobierno de la polis, concluirá que la principal fuente de conflicto político es la desigualdad entre ricos y pobres, proponiendo fórmulas que permitan enfrentar estas diferencias en la política. Modernamente Rancière planteará directamente el tema de la igualdad como el que define la política, pues la política es justamente la demanda por igualdad, llamando policía a todo lo que tenga que ver con la mantención del orden de las desigualdades. La comunidad política, dirá Rancière, se constituye por un desacuerdo, porque los que no tienen parte en la distribución de partes, proclaman la existencia de una comunidad a la cual ellos pertenecen pero en la cual son la parte de los que no tienen parte. Toda lucha política es una lucha por igualdad.

En este tema es donde precisamente se puede hacer una lectura del pasado desde el presente y tratar de abarcar el significado del Golpe militar de 1973 y cómo este significado permanece después de cuarenta años.

LOS PROCESOS DIVERGENTES

El golpe de Estado de 1973 termina abruptamente con un largo proceso de integración de la sociedad chilena que fue impulsado políticamente. Esto se desarrolla siguiendo el patrón normal de un desarrollo hacia la igualdad que es impuesto a través de la movilidad social y la participación política. Digo que es un patrón normal de desarrollo, porque la experiencia mundial señala que la igualdad no constituye una generosa iniciativa de los sectores económica y socialmente dominantes, sino que se genera en la medida que hay fuerza social y política para imponerla. Es posible, y de hecho ha ocurrido históricamente, que los sectores dominantes, por razones religiosas o ideológicas, practiquen la piedad con los humildes; también ha ocurrido un reformismo de anticipación que se promueve desde el poder a fin de evitar una acumulación de presiones que podría ser peligrosa en el futuro. Sin embargo, estas acciones de piedad o de reformismo de anticipación no alteran radicalmente la distribución del bienestar, sino que más bien consolidan la situación de las desigualdades. Distinto es el caso cuando el desarrollo de la igualdad es resultado de una correlación de fuerzas sociales y políticas favorables a ella; cuando los perjudicados toman la palabra.

No es casual que, si uno examina las mediciones de igualdad que se realizan internacionalmente, se pueda constatar que los mayores niveles de igualdad se dan en aquellos países que contaron con fuertes movimientos sindicales y partidos políticos que lograron imponer tales mayores niveles de igualdad. El famoso coeficiente GINI, que mide la igualdad de ingreso, y que es menor mientras más igualitaria es su distribución, nos muestra que en la actualidad los diez países con mejor distribución del ingreso (Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Austria) han tenido fuertes organizaciones de trabajadores y fuertes partidos representativos de tales intereses, como socialdemócratas, socialistas y comunistas (el laborismo inglés fue bastante más moderado en sus pretensiones y logros, siendo además desmantelado por la política de Margaret Thatcher, lo que no llevó a niveles de igualdad equivalente a los anteriores). Si se observa la situación en la región latinoamericana, podemos constatar que uno de los dos países que ha tenido históricamente la mejor distribución del ingreso, es Uruguay, lo que coincide también con ser el que ha tenido constantemente una mayor organización social y política de los sectores populares. Como en todos los casos, destaca un poderoso movimiento sindical y agrupaciones políticas que se identifican con los sectores populares.

Algunos podrían pensar que existe una relación muy directa entre democracia y mejor distribución del ingreso. Sin embargo, eso no es así. De hecho, los países que alcanzaron una mejor distribución del ingreso fueron los llamados países de “socialismos reales”, como la URSS y los países del Pacto de Varsovia, respecto de los cuales no existe mayor reconocimiento de que se tratara de países democráticos. Volviendo a América Latina, el país que ostentó la mejor distribución del ingreso fue Argentina a partir del populismo peronista. Este país se mantuvo con una de las mejores distribuciones del mundo durante toda la década del 70, en circunstancias que no es un país que ostente una larga historia democrática, aunque sí un muy fuerte movimiento sindical. A esto

habría que agregar que un antiguo estudio de Jorge Graciarena lograba establecer una aparentemente extraña relación entre democracia y distribución del ingreso, estudio en el cual los gobiernos dictatoriales aparecían entregando una mejor distribución de este, comparados con las democracias que se orientaban a la satisfacción de las clases medias.

Por otra parte, el país de mayor desarrollo económico y líder de la democracia política, que no ha tenido un importante movimiento social y político de los sectores populares, mantiene muy altos niveles de desigualdad. Tal es el caso de Estados Unidos, que está en el lugar 120 de la lista de 160 países, con un GINI equivalente al de México, Ecuador, Malasia y la República del Congo. Chile hoy está a solo veinte lugares de ser el último, acompañado por algunos países latinoamericanos y africanos.

Algunos señalan que los niveles de desigualdad en Chile son semejantes a los que tenía en el pasado. En efecto, si uno compara el índice GINI de fines de los 50 y comienzos de los 60 del siglo recién pasado, con el correspondiente a la primera década del siglo XXI, verá que este es solo levemente superior, es decir, un poco más de desigualdad. Sin embargo, la evolución de este índice nos muestra que desde mediados de los 60 empieza a descender y que se consigue la mayor igualdad a fines de los 60 y comienzos de los 70 (0,47). Por el contrario, a partir del golpe militar el índice GINI se empieza a incrementar fuertemente, para llegar en 1988 a ubicarnos como el país más desigual del mundo (0,65). El índice descende durante los primeros años de la Segunda República iniciada en 1990, pero luego se estabiliza y comienza subir lentamente en la primera década de este siglo, incrementando la desigualdad.

Si repasamos la historia de Chile al respecto, veremos que el proceso de igualación que se experimenta durante el siglo pasado es claramente coincidente con el proceso de politización desarrollado. En efecto, el desarrollo de un sindicalismo fuerte, especialmente en el sector minero, y la aparición de partidos de trabajadores en las décadas del 20 y 30 (partido comunista y socialista) van a impulsar sostenidamente tanto una mayor participación política como una mayor igualdad en la distribución del ingreso.

Sin considerar el período estrictamente oligárquico del siglo XIX, en el país se aprecian dos orientaciones en términos de participación política: un proceso de politización que culmina en 1973 y un proceso de despolitización a partir del denominado retorno a la democracia iniciado en 1988. Podría decirse así que, quienes no participan en la política antes de 1973, lo hacen porque todavía no se han incorporado a ella, mientras que quienes no participan en la política desde 1988 en adelante es porque se han alejado o han sido excluidos de ella.

Es fácil decir que politización es un proceso de involucramiento en la política y la despolitización es lo contrario. Lo difícil es cómo estudiar esto. Pareciera indiscutible que no es apropiado reducir la definición de la política a su forma democrática y adoptar como única expresión de politización la participación electoral. Aunque la participación electoral es fácilmente medible, el problema es que participación electoral y politización no son equivalentes ni siquiera en democracia, puesto que es perfectamente posible que aumente el involucramiento en política sin que ello se refleje en una mayor participación electoral, la cual puede ser abandonada por no considerarla el medio idóneo para hacer la política que se pretende. A la vez, es posible que aumente la participación

electoral por motivos distintos a la politización (temor a la sanción por no votar, espíritu lúdico, presión mediática, etc.). No obstante, de no haber cambios significativos en las condiciones de votación, es posible utilizar la participación electoral como indicador de politización, siempre que ello no aparezca contradicho con otras informaciones, como es la que entregan las encuestas serias de opinión pública, las cifras de organización social, los indicadores de conflicto, los registros de los partidos y otras fuentes. Esto último es lo que podría permitirnos sostener que en los últimos años se ha producido una fuerte activación política a pesar de la baja participación electoral.

Obviamente no pretendemos aquí tratar de levantar alguna hipótesis respecto de las causas de la politización o de la despolitización, pues reconocemos que es un fenómeno muy complejo que posiblemente responda a múltiples causas cuyo peso puede ser variable en situaciones diversas. Lo único que pretendemos es establecer la relación que tiene la politización y despolitización en Chile con las posibilidades de dirimir tendencias a la igualdad, puesto que esta es un resultado de correlaciones de fuerza capaces de imponerla. A su vez, esta politización implica la conformación de identidades colectivas en conflicto.

En el caso de la historia de Chile, la fuerte relación existente entre participación electoral y manifestaciones del conflicto, como organización social, huelgas, tomas, manifestaciones y otros indicadores, nos permite establecer la relación que existe entre el aumento y la disminución de la participación electoral, en cuanto expresión de un proceso de politización, con ciertos momentos de conformación de orientaciones colectivas en pugna sobre la igualdad.

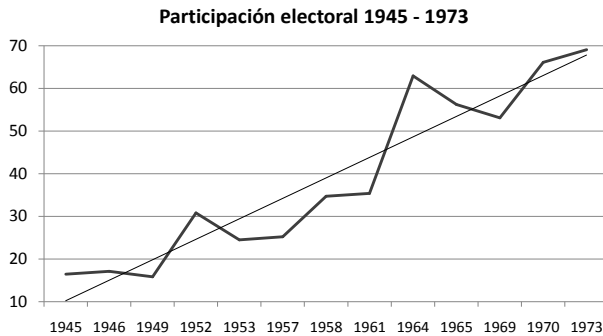
Una vez más nos parece conveniente resaltar el carácter no individual que tiene la participación política, por el contrario, la participación política tiene que ver con la conformación de sujetos colectivos, según veremos más adelante. Sobre la base de esa consideración nos parece posible plantear la distinción de cuatro períodos de participación política en Chile: Período oligárquico, Período de incorporación inicial, Período de incorporación masiva y Período de declinación.

Como ya señalamos, resulta difícil hablar de politización electoral en el período oligárquico, especialmente mientras se mantuvo en vigor el excluyente voto censitario. Pero aún después de la instauración del voto ampliado en 1873, mediante el resquicio de declarar que a quienes sabían leer y escribir se les presumía la renta que habilitaba electoralmente, la participación electoral se mantuvo muy baja, próxima el 2% de la población total.

El período de incorporación inicial se va a producir durante la primera mitad del siglo XX, manifestándose como un lento pero persistente crecimiento en la participación electoral, la que llegará al 7% de la población total en 1925 y alcanzará el 10% en 1949. Este aumento de la votación se relaciona muy directamente con el crecimiento de las organizaciones sindicales (la FOCH se crea en 1909) y la aparición y desarrollo de partidos ligados a los trabajadores (comunista y socialista en las décadas del 20 y 30). El Partido Radical crece entre los sectores medios, mientras que los partidos marxistas adquieren un fuerte peso entre obreros y mineros. La aún baja cantidad de ciudadanos que participaba en las elecciones, considerando además que solo los hombres tenían derecho a

voto, les otorgará a los partidos de trabajadores un fuerte peso en el ámbito político, lo que se refleja en un número importante de representantes elegidos y su participación, iniciada en 1938, en la coalición de Gobierno del denominado Frente Popular.

El período de incorporación masiva se producirá a partir de la segunda mitad del siglo XX, momento desde el cual se producirá un fuerte aumento de la participación electoral de la población. Ello suele entenderse como una consecuencia muy directa de la extensión del derecho a sufragio a las mujeres, pero lo cierto es que el crecimiento de la participación solo se explica en parte por este factor. Lo más característico del aumento de la votación en este período es que se produce en dos oleadas que significan en cada caso la duplicación de la participación electoral.



*Se calcula la participación electoral como cantidad de votos válidamente emitidos por sobre la población total en edad de votar.
Fuente: Elaboración de Carlos Azócar a partir de datos del Servel.

La primera oleada se produce en 1952, al ser elegido Ibáñez presidente. En ese momento se duplica el número de votantes en comparación con las elecciones de 1949. Muchos atribuyen este aumento de votantes a la incorporación por primera vez de la mujer a las elecciones presidenciales, también se suele creer que el voto femenino fue decisivo para el triunfo ibañista. Ambos son errores: las mujeres votaron proporcionalmente menos por Ibáñez que lo que lo hicieron los hombres; y el aumento de los votantes fue tanto de hombres como de mujeres, pues estas solo constituyeron un tercio del electorado en aquella oportunidad. Al parecer lo que ocurre es que el fuerte tono populista de la candidatura de Ibáñez logró incorporar por primera vez un sector importante del espacio popular, no incorporado anteriormente a través de los partidos de izquierda. Tal sector es el que hemos denominado en otra oportunidad como sector heterodoxo (marginalidad urbana y rural, trabajadores independientes, informales, cesantes) para diferenciarlo del sector ortodoxo de la clase trabajadora.

La segunda oleada se produce en 1964, en la elección de Eduardo Frei Montalva. Nuevamente se duplica el número de votantes de la elección anterior (1958). De nuevo este fuerte aumento de electores se explica solo en parte por una mayor incorporación de la mujer, ya que casi la mitad de los nuevos votantes son hombres.

Adquiere más relevancia para entender el fenómeno el hecho de que la Democracia Cristiana, partido del candidato triunfante, recién ha sido fundada en 1957 y la campaña también adquiere un fuerte tono populista impulsado por la carismática figura de su líder y el aporte de antiguos ibañistas (del Partido Agrario Laborista) incorporados a este nuevo partido.

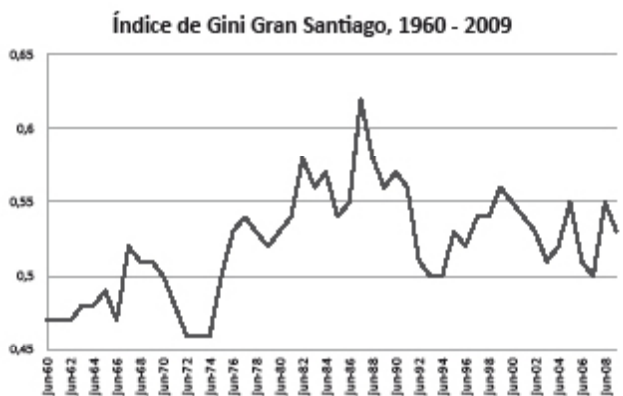
En la elección presidencial de 1970, no hubo un crecimiento de los votos, sin embargo, en marzo de 1973, en las últimas elecciones parlamentarias antes del Golpe militar, en una situación de grave polarización política, nuevamente hubo un incremento notable en la votación, subiendo esta en casi un 50%. En parte esto se explica por el hecho de que se baja la edad para sufragar de 21 a 18 años, pero en todo caso la proporción de mayores de 18 años que vota por primera vez no es superior al aumento de la proporción de mayores de 21 años que votó en 1970. Se alcanza así en esta elección parlamentaria de marzo de 1973 el máximo de participación electoral en toda la historia del país hasta ese momento (45,7% de la población total; 77,5% de los mayores de 18 años).

Si comparamos este aumento de la politización, expresada electoralmente, pero correspondida en el ámbito del conflicto social, vemos que corresponde al crecimiento de los partidos y movimientos ligados al sector popular. A su vez, esta politización se relaciona muy directamente con la clara mejoría de los índices de igualdad, pudiéndose constatar que la presencia de esas fuerzas políticas se expresa directamente en una mejor distribución del ingreso.

Finalmente, el período de declinación de la participación electoral se iniciará desde el retorno a la democracia en 1989. A partir de ahí se producirá una muy clara tendencia a la despolitización, medida en cuanto participación electoral, pero que también corresponde a la práctica desaparición de partidos y movimientos ligados al sector popular. Esto último da cuenta de una redefinición de los partidos políticos que no asume, sino que rechaza el ser expresión de determinados sectores sociales, como ocurría en Chile con los antiguos partidos de izquierda.



Examinando los datos, resulta claro que el aumento de la participación electoral antes del Golpe de 1973 se corresponde muy directamente con una distribución del ingreso más igualitaria, según señala la baja del índice GINI. Por el contrario, la distribución del ingreso saltará bruscamente a la desigualdad durante el gobierno de Pinochet, que logra eliminar toda organización y participación social y política de los sectores populares. El nuevo cuadro político que emerge en la última década del siglo recién pasado mostrará solo una mejoría inicial en la distribución del ingreso, pero pronto este retorno a la democracia estancará la situación de desigualdad y correlativamente mostrará una clara tendencia a bajar la participación electoral.



Fuente: Durán, Gonzalo. (2011) Collective Bargaining Structure and the incidence on income distribution. Some insights to the Chilean case. UNITO-SciencePO Master Thesis.

En efecto, el gráfico de coeficiente GINI muestra cómo este desciende hasta alcanzar el mínimo histórico en 1973 y luego, en el régimen instaurado después del Golpe militar, sube bruscamente hasta llegar al máximo el año 1989. No es casual que el aumento de la desigualdad coincida con el Golpe militar y el régimen de Pinochet, que destruyó toda capacidad de organización y acción de los sectores populares, atacando directamente sus organizaciones sociales y políticas.

Durante el gobierno de Pinochet, el ataque a la igualdad se produce a través de varias vías, dentro de las cuales destacan las nuevas definiciones de política de Estado que significarán en muchos casos transferencias muy directas de recursos a la empresa privada. Pero, en términos de acción directa sobre la igualdad, esto se manifiesta principalmente a través de dos vías: disminuir el pago al trabajo y privatizar los servicios públicos.

La disminución del costo del trabajo se expresa inicialmente en una fuerte cesantía y en una pérdida de la remuneración del trabajo. La cesantía durante ese período fue la más alta de la historia del país y llegó a bordear el 30% real de la fuerza laboral en los años 1983-1984. En cuanto a las remuneraciones, la caída de estas durante ese régimen se expresa claramente en el hecho de que recién en 1998 se recupera el promedio de remuneraciones de los años 1971-72. Al respecto, también es interesante que otro de

los grandes olvidos de la memoria histórica actual sean los largos años de miseria de los sectores populares, de indignidad, de pérdida de expectativas para sus hijos, que fue el precio para obtener una acumulación de capital que permitiera el desarrollo dentro del modelo neoliberal. El retorno a la democracia no significó una recuperación plena del valor del trabajo, sino que, a pesar de su lento crecimiento en términos reales, este sigue estando por debajo del crecimiento del producto y mantiene a una gran proporción de los trabajadores con muy bajas remuneraciones y en condiciones precarias.

La otra vía de atacar la igualdad se desarrolla a través del proceso de privatización de los servicios públicos. Más allá de las eternas discusiones acerca de la eficiencia, es innegable que la privatización, la entrega al mercado de la provisión de determinado servicio, contribuye radicalmente a la desigualdad. El mercado, por definición, es inequitativo, puesto que no entrega el servicio indiscriminadamente a quien lo necesita, sino que condiciona su entrega en cantidad y calidad a la capacidad de pago. No solo es el caso de la educación, también ocurre en otros servicios, como la salud y la previsión, u otros para los que exista la pretensión de que sean derechos ciudadanos. No pareciera haber duda de que la privatización de esos servicios públicos aumentó tremendamente la desigualdad de los ciudadanos, ya que generó distinto acceso y calidad a la educación, la salud y la previsión según la capacidad de pago de cada ciudadano.

EL GOLPE A LA IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN

El golpe a la igualdad, que es el sentido fundamental de la intervención militar de 1973, naturalmente afecta todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, principalmente a través de las dos vías que se han mencionado: la disminución del costo del trabajo y la privatización de los servicios públicos. Las prolongadas y masivas movilizaciones sociales desarrolladas en los últimos años en protesta contra las condiciones en que se desarrolla la educación en el país, han puesto en particular relieve lo ocurrido respecto de este ámbito en cuanto a condiciones de desigualdad generadas como resultado del golpe.

Es interesante señalar que la afirmación de que la educación contribuye a una mayor igualdad en términos de ingresos carece de fundamentos. De hecho, en los últimos cuarenta años ha aumentado extraordinariamente el nivel de la educación alcanzado por la población, con plena cobertura en la enseñanza media y muy altos niveles en educación superior, sin embargo ese aumento en la educación ha coincidido con el aumento de la desigualdad. Por más que se repita majaderamente, el aumento de la educación e incluso el mejoramiento de la calidad de esta, no tiene mayor incidencia en la igualdad en la repartición del producto social. El gran mérito que tiene el acceso equitativo a una buena educación es que nivela las oportunidades para establecer las diferencias, pero no elimina las diferencias. En este sentido sí que corresponde la demanda por una educación que no discrimine por calidad según la capacidad de pago de las familias, puesto que si los pobres solo tienen acceso a una educación de baja calidad eso garantiza la reproducción de la pobreza al ponerlos en desventaja frente a las oportunidades. En

tal sentido, puede sostenerse que una educación igualitaria, cuya calidad no dependa de la capacidad de pago, permite una mayor movilidad, entendida como movilidad individual entre las distintas posiciones sociales, pero no altera la jerarquía de posiciones sociales. Por otra parte, el argumento de que un aumento de la educación permite una mayor capacidad laboral, que redundaría en una mayor productividad y por tanto justifica un mayor salario, solo tiene un sentido individual y no social. La producción es un proceso social, en el cual todos los que concurren son necesarios, de manera que el diferencial de remuneraciones es una convención establecida por el mercado o la autoridad. El sentido social del aumento de la educación es que este permite aumentar la productividad social y esto aumenta lo que se puede repartir entre todos. El cómo se reparte es asunto de la política.

En todo caso, podría decirse que la perspectiva actualmente predominante tiende a considerar la educación como una especie de capacitación laboral personal, esto es, como una formación para el desempeño en la actividad económica. Sin embargo, es claro que la educación no solo debe ser considerada en cuanto a su utilidad para mejorar económicamente, sino que es el medio de adquirir conocimientos y habilidades intelectuales que desarrollan al ser humano, teniendo un valor en sí misma más allá de la utilidad que de eso se pueda derivar. Ese es el pleno sentido del derecho a la educación, concebido en términos más amplios que la simple capacitación laboral que permita mejorar los ingresos económicos individuales. Naturalmente el derecho a la educación deja de ser igualitario cuando su privatización regula el acceso al nivel y calidad según la capacidad de pago de los sujetos.

En el ámbito de la educación, el proceso previo al Golpe militar se inscribe dentro de la tendencia general a la igualdad que, como se ha visto, corresponde a la presencia política activa de los trabajadores y otros sectores populares a través de sus organizaciones sociales y políticas. El desarrollo del principio del Estado docente antes de 1973 significó una extensión cada vez más amplia de la educación entregada gratuitamente como un derecho a través de las instituciones públicas, como colegios, liceos y universidades. Dichas instituciones públicas entregaban una educación gratuita de buena calidad y ampliaban progresivamente su cobertura, desde la enseñanza básica a la media y superior.

Las escuelas públicas y los liceos cubrían más del 80% de la matrícula, entregando educación gratuita de buen nivel a la población escolar. En educación superior los números son elocuentes: entre 1950 y 1975 el número de matriculados en la educación superior se multiplicó por diez pasando de una tasa de 1,6 por cada mil jóvenes entre 20 y 24 años a una tasa de 15, correspondiendo a instituciones del Estado más del 70% de las matrículas, mientras que las privadas recibían aportes fiscales que les permitían también entregar educación gratuita.

El golpe a la igualdad, que significó la intervención militar en el ámbito de la educación, resulta particularmente grave si se compara la que existía hasta ese momento con la que se establece a partir de dicha intervención. En efecto, si hasta 1973 Chile contaba con una educación pública de buena calidad que cubría prácticamente al 80% de la población escolar, en la actualidad la matrícula escolar en las antiguas escuelas y liceos públicos, hoy municipalizados, es inferior al 40% y sigue disminuyendo presionada

por su baja calidad. La educación superior está actualmente totalmente privatizada: la técnica profesional explícitamente, mientras que la universitaria conserva formalmente instituciones públicas, pero privatizadas realmente por la vía del autofinanciamiento forzoso. Más aun, incluso en situación de autofinanciamiento, el Golpe militar tuvo como consecuencia muy directa una reducción de las universidades públicas, bajo lo cual la Universidad de Chile resultó la más perjudicada. Resulta interesante comparar la situación de la Universidad de Chile, antes y después de la intervención militar, pues revela el tremendo costo que tuvo en su desarrollo. No solo se trata de la recordada y traumática pérdida de todas sus sedes regionales y de su Instituto Pedagógico, sino de cómo se logra disminuir su peso en la formación universitaria en beneficio de las instituciones particulares. Esto se aprecia en su participación en las matrículas: en 1973 era lejos la Universidad con mayor matrícula; con 21.000 estudiantes universitarios de un total nacional de 47.000, es decir, casi la mitad del total. Actualmente tiene 25.000 de un total de 600.000, esto es, menos de la vigésima parte. Esto no está siquiera relacionado con perder sus sedes regionales y el Pedagógico, pues ya en 1978, antes que aquello hubiera ocurrido, su matrícula ya había sido reducida a la mitad. Las comparaciones, que siempre son odiosas, también muestran que en el año 1973 la Universidad de Chile tenía seis veces más estudiantes que la Universidad Católica, mientras que en la actualidad están solo a 5.000 alumnos de diferencia. De más está recordar que la Universidad de Chile no solo era un símbolo republicano, sino que era uno de los centros más activos en la lucha por la igualdad.

En la actualidad, la educación superior está totalmente privatizada en Chile y su costo es uno de los más altos del mundo, pero el aporte fiscal a ese financiamiento es el más bajo, lo que redundó en que la educación quede segmentada en cantidad y calidad según el poder de pago de las familias. En la medida que la educación tiene una alta incidencia en los ingresos que obtiene cada uno, esto constituye un freno para la movilidad social de las personas, lo que contradice la ideología del logro que pretende justificar las desigualdades existentes.

Actualmente la historia tiende a enfatizar que fue el rechazo a las violaciones a los derechos humanos y la aspiración por un régimen democrático lo que desarrolló a la oposición y generó las movilizaciones que terminaron por poner fin al régimen militar. El conflicto habría sido básicamente un conflicto planteado respecto al régimen político, sin establecerse mayores vinculaciones con los problemas económicos de igualdad que sufría gran parte de la población. Sin embargo, es innegable que el desarrollo de las movilizaciones se corresponde muy directamente con la grave crisis económica de 1983, que genera condiciones intolerables para gran parte de la población, especialmente los sectores populares. El análisis de los hechos y especialmente de la población movilizada muestra que había grandes expectativas respecto a cambios económicos que permitieran salir de las penurias que se sufrían y lograr una mayor igualdad. La politización de la segunda mitad de la década de los 80, expresadas con claridad en las “protestas nacionales”, es también una movilización por igualdad, aunque esta se simbolice en un cambio de régimen político, pues se supone que el cambio de régimen va a ser la fórmula para un sustancial avance en ese sentido.

Son estas condiciones las que explican que el régimen militar se cierre formalmente a través del plebiscito de 1988, con una población dividida radicalmente entre pinochetistas y antipinochetistas, logrando la mayor participación electoral de la historia.

En breve: la participación electoral aumenta en la medida que aumentan las identidades colectivas y estas plantean un cuestionamiento al orden. La perspectiva del voto individual es un absurdo; un individuo no gana o pierde una elección. Lo que gana o pierde una elección es un sujeto colectivo: un partido, un movimiento, una identificación con un liderazgo o una identificación contra un liderazgo. En Chile los sujetos colectivos que cuestionan el orden se desarrollan a través de partidos de trabajadores para la clase popular ortodoxa (obreros y empleados) y a través de movimientos populistas para la clase popular heterodoxa (campesinos y marginales). En la medida que ese sujeto colectivo pone en cuestión la justicia del orden establecido y se produce la identificación amigos-enemigos respecto de ese cuestionamiento se desarrolla un proceso de politización. Proceso de politización que no implica necesariamente la violencia ni la resolución definitiva de lo cuestionado, pero que va a incidir en los consensos sobre la justicia que correspondan a las reales correlaciones de fuerza.

A pesar de la participación activa de los sectores populares en las movilizaciones sociales de protesta y en la definición electoral, la transición desde el régimen de Pinochet a la Segunda República se realiza sin que exista una participación real de esos sectores. No hay, entre los que participan en esta transición, partidos fuertes que representen a los sectores populares, tampoco hay organizaciones sociales fuertes de ellos. Por el contrario, la transición solo se hace posible en la medida que las tradicionales organizaciones políticas de los sectores populares han sido aisladas o neutralizadas (el Partido Comunista es aislado de toda posible articulación con otras fuerzas, el Partido Socialista es neutralizado con el control que toman de él los sectores más conservadores), a su vez, las organizaciones poblacionales y sindicales han sido desplazadas por las organizaciones de clase media de los colegios profesionales. El apoyo masivo de los sectores populares a la opción NO (los datos electorales del plebiscito son muy claros al respecto) tal vez explique que inicialmente el Gobierno de la Segunda República muestre mayor preocupación por la distribución del producto, lo que genera una baja en el índice GINI, es decir, que disminuya algo la desigualdad. Pero posteriormente la desigualdad se estabiliza y aumenta, mientras también aumenta la desafección por el régimen político y la despolitización medida electoralmente llega a su máximo nivel.

Por cierto, el aumento de la desigualdad no es una característica nacional, sino que mundialmente la desigualdad ha aumentado. Es posible argumentar que detrás de esto hay explicaciones genéricas, como puede ser la caída en la tasa de ganancia o la impotencia de una política que sigue siendo nacional para enfrentar la globalización económica. No obstante, también es necesario tener en consideración que las transformaciones estructurales y culturales han generado condiciones mucho más difíciles para que puedan generarse movimientos sociales y políticos entre los sectores perjudicados en la repartición del producto común. No tiene nada de extraño que el aumento de la despolitización se relacione muy directamente con el aumento de la desigualdad, puesto que sin un real conflicto sobre la igualdad no hay política. Esta ausencia de política es lo

que ha permitido a algunos hablar de fin de la historia. Sin embargo, nunca estaremos en el fin de la historia, porque la historia es una construcción del pasado a la que le damos un cierto sentido y siempre podrá construirse de otra manera.

Tal vez sea conveniente prestar atención al hecho de que en los últimos años se asiste a un creciente descontento no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Tal indefinido malestar está dando cuenta de un real o virtual conflicto de igualdad, un conflicto político. Pero los procesos sociales no son procesos teóricos o genéricos, sino que se realizan como procesos históricos concretos y adquieren las características de esos procesos específicos que también generan las alternativas que se juegan del futuro. En Chile hace cuarenta años se produjo el golpe a la igualdad y ese sentido de la historia está poco construido. El pasado se construye como memoria solo en relación con las violaciones de derechos humanos, pero se considera poco que las violaciones de los derechos humanos fueron un medio para recuperar y profundizar las desigualdades que son las bases de la existencia de privilegios. Han transcurrido cuarenta años desde el golpe a la igualdad, pero han pasado también más de veinte años de democracia sin que las consecuencias de aquel golpe a la igualdad desaparezcan. Esto no es tan extraño, porque la democracia no significa necesariamente igualdad.

En la actualidad en Chile se habla mucho de paradojas, de cosas raras, que no encajan, que no se entienden. Los extranjeros no dejan de manifestar su asombro y entre nosotros mismos abundan los perplejos. Está por una parte la maravilla de las estadísticas, por más dudosas que ellas sean, que muestran un alto crecimiento económico, una inflación controlada, una modernización tecnológica, un consumo desenfrenado, un reconocimiento internacional al incorporarse a la OCDE, presencia empresarial internacionalizada... Está, por otra parte, la apatía electoral, el rechazo a la institucionalidad política y a sus agentes, el descontento, las movilizaciones sociales, las encuestas de los rechazos. Pero el pasado no es un antecedente del presente, sino un componente de este, y el pasado de Chile tiene un momento de igualdad que no desaparece, sino que se recupera como nuevo planteamiento político, aunque no sea claro el proyecto ni el sujeto de tal planteamiento.